

Julio 19 de 1939

22ª REUNION — 20ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

DIPUTADOS PRESENTES:

Aguar, Henoch D.
Aguirre Cantara, José
Agulla, Juan Carlos
Alsina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperin, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Arbeletche, Anibal P.
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Beiró, Angel Francisco
Bertotto, José G.
Boatti, Ernesto C.
Boero, Albino
Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Cabrál, Humberto
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Castro Frediani, Manuel L.
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courel, Carlos D.
Damonte Taborda, Raúl
De Miguel, Benito
Devoto Acosta, Alcibiades
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Duffy, Eduardo N.
Eberlé, Enrique
Eyto, Francisco F.

Fassi, Santiago Carlos
Fazio Rojas, Lorenzo
Figueroa, Julio A.
Garona, Juan A.
Ghioldi, Américo
Godoy, Raúl
Gómez Grandoli Clemente
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamín S.
Grassi, Alfredo
Grisolia, Luis
Güerci, José María
Gusliamelli, Arciles M.
Guillot, Victor Juan
Gutiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Horne, Bernardino
Illanes, Eloy J.
Infante, Fausto
Iriyoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Lanús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lima, Vicente Solano
López, Héctor A.
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Medina, Justo G.
Méndez Calzada Joaquín
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Mugica, Adolfo
Muniascurria, Walter Julio
Noel, Carlos M.
O'Reilly, Guillermo R.

Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osore Soler, Manuel E.
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Ramón D.
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Peña, Solano
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Prat Gay, Fernando de
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Ruegieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Sacccone, Romeo D.
Sancerni Giménez, Julián
Sanchez, Adolfo B.
Schoo Lastra, Dionisio
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solís, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa
Vásquez, Juan Carlos
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo

AUSENTES, CON LICENCIA:

Basualdo, Honorio
Beristain, Francisco
Biancofiore, Rafael
Ferreira, Antenor R.
Hernández, Victorio
Izurieta Fourquet, Agustín
Martínez, F. Benigno
Martínez, Gregorio N.
Martínez, Manuel
Noel, Martín
Onsari, Fabián
Osorio, Miguel
Quintana, Fenelón
Sáenz, Mario
Urien, Enrique César
Vélez, Francisco M.
Vilgré La Madrid, Juan
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, SIN AVISO:

Arias Uriburu, Juan
Barrionuevo, Gerardo
Carús, Agustín J.
Guerrero, José Rafael
Hernández, Clodomiro
Labayen, Juan
Morrogh Bernard, Juan F.
Radio, Pedro
Rocha, Justo V.
Sammartino, Ernesto
Simón Padrós, J.
Telsaire, Eduardo (h.)

AUSENTES, EN COMISION

Acuña, Aurelio S.
Lezica Alvear, Florencio
Pandolfo, Pío
Pizarro, Néstor A.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando los informes solicitados, relacionados con la plaga de la langosta tucura.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo, contestando los informes solicitados, respecto a actividades inmigratorias en el país.

III.—Comunicaciones del Honorable Senado.

IV.—Comunicaciones oficiales.

V.—Despacho de comisión.

VI.—Peticiones particulares.

VII.—Proyecto de ley, del señor diputado Barrau, sobre exención de multas a los deudores

de contribución territorial, réditos, ventas, etcétera.

- VIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Pita y otros, sobre creación de un instituto del profesorado secundario y lenguas vivas, en la ciudad de Santa Fe.
- IX.—El señor diputado Ghioldi, reproduce un proyecto de ley orgánica para la municipalidad de la Capital Federal.
- X.—Proyecto de ley, del señor diputado de las Carreras, sobre erección de un monumento a los Treinta y tres orientales.
- XI.—Proyecto de ley, del señor diputado Devoto Acosta, sobre creación de una escuela profesional y de industrias domésticas para mujeres, en Curuzú Cuatiá (Corrientes).
- XII.—Proyecto de ley, del señor diputado Jiménez y otros, sobre modificación del inciso 2º, ítem policía marítima, personal superior, del anexo G (Marina) de la ley general de presupuesto.
- XIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Cafferata y otros, sobre obras de provisión de agua potable a las poblaciones del Sur y Sureste de la provincia de Córdoba.
- XIV.—Proyecto de ley, del señor diputado Courel y otros, sobre subsidio a la casa-cuna de la ciudad de Córdoba.
- XV.—Proyecto de ley, del señor diputado Iriondo y otros, sobre retribución de servicios notariales.
- XVI.—Proyecto de ley, de los señores diputados Pagano y Cisneros, sobre subsidio a la Mutualidad del Magisterio, de la Capital Federal.
- XVII.—Proyecto de ley, del señor diputado Bertotto, sobre creación de un instituto nacional del profesorado, en la ciudad de Rosario.
- XVIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Susan, sobre obras en el parque José F. Villarino, de Zaballa (Santa Fe).
- XIX.—Proyecto de ley, del señor diputado Allperin, sobre escuelas prácticas de agricultura y ganadería en Tres Arroyos y Pellegrini (Buenos Aires).

4.—Nómina de proyectos de resolución.

5.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados Osorio, Ferreira, Onari, Martínez (G. N.), Biancofiore, Basualdo y Sammartino.

6.—Asunto entrado:

XX.—Mensaje del Poder Ejecutivo, excusando la inasistencia del señor ministro de Re-

laciones Exteriores y Culto, para contestar la interpelación sobre política inmigratoria.

- 7.—Mociones del señor diputado Palacio: fijando nueva fecha para considerar la interpelación sobre política inmigratoria; y autorizando a los miembros de las Comisiones de Legislación Agraria y de Industrias y Comercio, para trasladarse a las provincias del Norte. Son aprobadas.
- 8.—Indicaciones del señor diputado Guglielmelli, sobre pronto despacho de diversos asuntos relacionados con la situación del gremio ferroviario y sobre inserción de dos artículos periodísticos.
- 9.—Indicación del señor diputado Piedrabuena, relacionada con el trámite del proyecto sobre pavimentación del camino San Justo - Resistencia.
- 10.—Indicación del señor diputado Amadeo y Videla (h.), sobre pronto despacho del proyecto sobre fomento del ahorro.
- 11.—Termina la consideración del proyecto de declaración, del señor diputado Allperin, sobre designación de una comisión técnica encargada de estudiar la situación social y económica de los territorios del Sur. Es aprobado.
- 12.—Indicación del señor diputado Amadeo y Videla (h.), para que se destine a la Comisión de Legislación Agraria el mensaje del Poder Ejecutivo informando sobre langosta tucura. Es aprobada.
- 13.—Proyecto de resolución, del señor diputado Muñagurria, sobre designación de una comisión especial encargada de estudiar y despachar los proyectos de extinción de la acción de los saldos personales y de modificación del régimen jurídico de las convenciones hipotecarias. Es retirado.
- 14.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del consejo nacional de colonización.

—En Buenos Aires, a diecinueve días del mes de julio del año 1939, siendo la hora 15 y 59:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Lazo. — Como está próxima a vencer la hora, propongo que se espere quince minutos más.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se esperará.

—A la hora 16 y 5:

14

COLONIZACION NACIONAL

—Véase el despacho en la página 168.

Sr. Presidente (Kaiser). — Corresponde continuar la consideración del despacho contenido en la orden del día número 73, sobre creación del consejo nacional agrario.

Había solicitado la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ghioldi. — Propondría que la Cámara pasara a cuarto intermedio por cinco minutos.

Sr. Guillot. — ¿Permaneciendo en las bancas?

Sr. Ghioldi. — Sí, señor diputado.

Sr. Guillot. — Podría invitar al señor presidente.

Sr. Presidente (Kaiser). — Si hay asentimiento, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio por cinco minutos, permaneciendo en sus bancas los señores diputados.

—Asentimiento.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 18 y 5.

—A la hora 18 y 7:

Sr. Pinto (h.). — Tengo entendido, señor presidente, que se va a continuar tratando el despacho sobre colonización.

Sr. Presidente (Kaiser). — Así es, señor diputado, pero la Cámara está en cuarto intermedio en este momento.

Cuando se reanude la sesión le corresponde la palabra al señor diputado.

—A la hora 18 y 12:

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa la sesión.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Abrigo el propósito de defender, al intervenir en este debate, algunos aspectos de política agraria en materia de colonización, insinuados en el proyecto de ley sometido oportunamente a la consideración de la Cámara y que, con pequeñas modificaciones, reconoce su filiación en el surgido de las deliberaciones de un congreso especial reunido en 1934, bajo la presidencia del doctor Julio M. Facio, y recordado en la prolija revista de antecedentes por

el señor presidente de la comisión, en su meditado informe, y por el señor ministro de Agricultura en su interesante exposición.

No es mi intento, desde luego, enfrascarme en una exposición doctrinaria y teórica, impropia del sobrio desarrollo de la discusión en general, concretándome a fundar mis reparos al despacho, que por otra parte no han de afectar la unidad del mismo, cuyas líneas generales suscribo, adhiriendo a sus innovaciones fundamentales en la medida que con tanta ponderación ha expuesto en nombre de la representación radical el señor diputado por Entre Ríos, doctor Horne.

Para evitar que una fronda engañosa oculte o impida ver con claridad las observaciones al despacho que la crítica objetiva sugiere, he de resumirlas en el siguiente orden.

Primero, acerca de la composición del consejo que es un tanto diminuta, excluyendo de representación al Consejo Nacional de Educación; indispensable si se piensa acometer seriamente la tarea de educar al futuro colono, despertando y perfeccionando su vocación rural y omitiendo también la representación de las entidades agrarias más caracterizadas.

Segundo, no aparece con la claridad aconsejable, la incorporación al régimen integral de la ley y de sus evaluaciones, de la tierra de las juntas reguladoras, de las entidades bancarias oficiales y en particular del Banco Hipotecario Nacional, no obstante el inciso c) del artículo 7º, el b) del artículo 8º y los artículos 18 y 19 del despacho, pues, como es sabido, en el 20 se introduce un sistema de tasaciones distinto para las propiedades de los particulares, a lo que establece el artículo 19 para las tierras de los Bancos oficiales, las cuales serán pagadas —garantizado su importe, dice el despacho— por el precio de inversión de los Bancos, cuando adquirieron esas propiedades.

Reputo de gran utilidad una aclaración que haga imposible la coexistencia de distintos sistemas, tanto más grave cuanto que a juzgar por este despacho existen distintos módulos colonizadores:

Primero. — El que establece el despacho de la comisión.

Segundo. — El establecido por la ley número 10.676 en materia de colonización de las tierras de propiedad del Banco Hipotecario Nacional, y, por último, el régimen instaurado por la ley número 12.235 que asigna funciones colonizadoras a la Junta Reguladora de Vinos. Y como si eso no fuera suficiente, todavía se agrega otro

sistema que es el vigente respecto a las tierras fiscales, porque el despacho establece, en su artículo 72, que se pone a cargo del Consejo Agrario Nacional, el sistema de las leyes nacionales números 4.167, 5.559 y 10.247. Mi crítica, en síntesis, es la siguiente: falta unidad y existen en el despacho distintos sistemas colonizadores antitéticos y anárquicos.

Tercero. — Aun cuando el inciso f) del artículo 7º autoriza con la aprobación del Poder Ejecutivo a realizar convenios con grupos de familias o agricultores residentes en el extranjero, o con instituciones de reconocida solvencia, para radicarlos en la República, estimo más conveniente y amplio, por otra parte, dentro del sistema de la organización nacional del trabajo, a la cual ha adherido la República Argentina, en virtud de la ley número 11.722, ratificando el pacto de la Sociedad de las Naciones, facultar al consejo, de acuerdo al Poder Ejecutivo, para establecer relaciones con la Oficina Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, a fin de coordinar la colonización mediante una adecuada política inmigratoria.

Cuarto. — De una vaguedad criticable resulta la disposición dedicada a la enseñanza rural, innocuo aparece el inciso i) del artículo 7º. No se instituye, aun cuando fuera limitadamente, el sistema de la colonia escuela, y tampoco se otorga preferencia ni posibilidades mayores porque no se organiza el crédito personal para la adjudicación y venta de los predios a los egresados de las escuelas rurales que no tengan otro capital que sus brazos, ateniéndonos a lo preceptuado por los artículos 25 y 26 del despacho; aun cuando cabe reconocer que podría, con leves modificaciones, salvarse este inconveniente a la luz del generoso propósito que inspira el despacho en su artículo 67, al habilitar con 6.000 pesos a los hijos de agrarios y a los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería que carecieran de recursos para adquisición de implementos, instalaciones y máquinas.

Quinto. — No obstante las disposiciones redactadas para evitar la concentración de la tierra una vez subdividida y enajenada, no aparece en el despacho contemplada la hipótesis compleja y grave planteada, sobre todo en materia de tierra fiscal, por la intervención de potentes sociedades anónimas que acaparan parcelas constituyendo de esa suerte verdaderos latifundios, sobre todo en las regiones Sur y Norte del país, frustrando de esa manera los propósitos de colonización con fines socia-

les, puesto que el despacho no modifica un ápice la ley de tierras número 4.167 del 8 de enero de 1903, siendo, en consecuencia, una esperanza que se disipa la de obtener la radicación de productores autónomos en las reservas de tierras fiscales, y se malogra toda política demográfica de aumento racional de los agregados humanos.

Sexto. — En el capítulo XIII corresponde señalar, sin ánimo de crítica menuda, algunas deficiencias de técnica jurídica que, por lo menos, exigen una aclaración. Me refiero, en el capítulo de rescisión de los contratos, a los artículos 45 y 46, que otorgan al consejo facultades judiciales de extraordinaria latitud. Así, por ejemplo: «Queda facultado el consejo a proceder, sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio, y, asimismo, queda facultado a proceder a la venta del predio, por sí y sin forma alguna de juicio, en remate público y con base total de la deuda». Todo esto, sin intervención judicial, allanando defensas procesales y sin conocimiento del interesado. Me parece un tanto excesivo; y aun cuando puede reconocerse el origen de esta disposición en algunas similares de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, es conocido, como lo enseña la jurisprudencia, en qué medida el poder judicial ha atenuado la rigidez ejecutiva del procedimiento, reconociendo algunas garantías procesales y de defensa para el deudor en la forma que lo ha establecido la Corte Suprema, cuando dice en un fallo que «el interés público del Banco Hipotecario Nacional, que es el fundamento de su ley, no excluye el alto interés social de las demás instituciones jurídicas.»

Séptimo. — La base financiera presupuesta por el artículo 56 es notoriamente precaria y endeble; y aun cuando se ocuparán de esta parte otros colegas con la extensión que merece, no quiero dejar de significar que se pone a cargo de la Nación, de rentas generales o en títulos externos o internos, la suma de pesos 100.000.000, siendo 30.000.000 entregados de inmediato de rentas generales o del producido del fondo de beneficios de cambios o de una operación de crédito interno o externo. Desde luego, no se crea prudentemente un recurso especial, que podría haber proyectado la comisión, incidiendo en algunos de los rubros de la renta de la propiedad, o de las grandes propiedades, que con propósitos sociales hubiera constituido un recurso especial para el cumplimiento de los fines de esta ley. Por lo tanto, reputo

de gran interés la presencia en el recinto del señor ministro de Hacienda, para que nos explique qué posibilidades financieras se puede abrigar para tener así la seguridad de la aplicación de la ley con la urgencia que aspira, sin duda alguna, toda la opinión responsable del país.

Quedan así en forma concreta formulados los reparos fundamentales al despacho, que serán concretados en la discusión en particular, aun cuando para ser justo cedo sin violencia en el reconocimiento de su mérito puesto que la crítica tiende solamente a colaborar en la mejor sanción de esta ley fundamental para el armónico desarrollo de nuestra economía.

El despacho contiene innovaciones que modifican substancialmente el álveo de nuestro derecho civil individualista, y del régimen jurídico de la propiedad. Opone categorías: a la propiedad urbana opone la rural, condicionadas una y otra por distintas reglas legales. Así, verbigracia, establece nuevas restricciones y límites al dominio rural en mira al interés general y colectivo, como dice el codificador en la nota puesta al pie de los artículos 2.507 y 2.508, que atenúan en parte la rigidez del concepto de la propiedad quirritaria que trasunta el artículo 2.513 del Código Civil. Este despacho también otorga con amplitud la facultad de expropiar al Estado, castigando las tierras abandonadas u ociosas, fija reglas para apreciar el valor de la tierra expropiada en relación con la producción calculada en los últimos diez años y combate el latifundio y el minifundio mediante el arma de la expropiación, y finalmente proscribire en lo posible la especulación, que hiere de muerte creando valores artificiales a una colonización honestamente practicada y económicamente concebida.

Pido perdón a la Cámara, porque distraeré su tiempo haciendo un brevísimo estudio de derecho comparado, tendente a allegar materiales de orden jurídico para demostrar que a esta altura de la evolución del derecho, los principios sentados por la comisión marchan paralelamente a lo que constituye la legislación del mundo en materia agraria.

Al ocuparse de las constituciones de la posguerra, un eminente tratadista Mirkiné Guetzevitch, ha subrayado fuertemente el aspecto de la racionalización del derecho o de la denominada constitucionalización del derecho privado con estas palabras aparecidas en el prólogo del libro *Las nuevas constituciones del mundo*: «El Estado, dice, no puede sólo limitarse al reconocimiento de la independencia jurídica del

individuo; debe crear un mínimo de condiciones necesarias para asegurar su independencia social. Hay dos procesos simultáneos: de una parte, los derechos individuales fundamentales y de otra parte, el afianzamiento de la solidaridad, del orden público, etcétera. Y en nombre de este principio social superior, se asiste a una limitación de ciertos derechos fundamentales, en particular del derecho de propiedad que evoluciona a nuestra vista». Es éste el punto que ha sido señalado agudamente por un joven profesor universitario, Enrique Díaz de Guijarro, afirmando que el derecho se presenta como aspecto de la organización social, dedicando un substancioso opúsculo titulado «Transformaciones modernas del derecho civil», a desarrollar esa teoría. Prolifera de esa manera la legislación que se aparta de la concepción de la propiedad de corte individualista y ranciamiento extraída del viejo derecho romano, y estas características se acentúan más aún en la propiedad rural.

Así, por ejemplo, en Iberoamérica, las constituciones de México, de 1917; de Colombia, de 1936, y de Brasil, de 1937, como lo enseñan las cláusulas del artículo 113, disponen que el derecho de propiedad no puede ser ejercido contra el interés social o colectivo. Va más lejos aún, la ley de tierras número 200, de Colombia, del 30 de diciembre de 1936, con su artículo 1º, al establecer la presunción de que no son tierras baldías sino de propiedad privada los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganado y otros de igual significación económica, y con su artículo 2º, al determinar la presunción de que son baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo anterior.

No sólo en América han adquirido franquía tales principios, sino también en el derecho comparado de Europa. Las constituciones de Alemania, en su artículo 153; de Polonia, Yugoslavia con sus artículos 37 y 43; de Irlanda, reconocen el derecho de propiedad en función de su utilidad social. Y para no abundar en detalles, bastará citar la Constitución de Polonia del año 1921, revisada en 1926, cuyo artículo 99 *in fine* dice así: «Las leyes determinarán la medida en la cual el Estado tiene derecho a proceder a la retroventa forzosa de la tierra y regular el traspaso, inspirándose en el principio de que la estructura agraria de Po-

lona debe ser fundada sobre unidades agrícolas capaces de suministrar la producción normal y que constituyan la propiedad individual de los ciudadanos.»

La unidad agraria de producción es perseguida también por la ley francesa de 1928, de *remembrement*, por el artículo 91 de la Constitución lituana de 1928, por el artículo 155 de la derogada Constitución alemana de Weimar, por la cláusula 47 de la Constitución de Perú de 1933 e igualmente expresada en el Código Civil suizo, en el artículo 630, y en el de Méjico, artículo 253.

Tienden todas estas disposiciones a conservar vigorosamente la pequeña y mediana propiedad rural, de acuerdo a las necesidades económicas y al imperativo geográfico de la producción, como piedra sillar de una coherente estructura social.

Celebremos, entonces, como un hecho auspicioso la introducción de estos principios en el despacho de la comisión, que se traducirán en una mejor organización de nuestros trabajadores rurales, quienes se enfrentarán confiados así con el porvenir; y si bien empeñados en el cumplimiento de la bíblica tarea, con la cierta satisfacción de sentirse artífices, como dueños de verdad de la indefinida riqueza de nuestro portentoso agro.

La ley de colonización debe, en primer término, conducir a la radicación del productor a la tierra. Hay que cerrar el ciclo caracterizado por la inestable masa trashumante de arrendatarios que ambulan de un lugar a otro. No pueden sólo las tendencias divisivas de nuestro Código Civil, a las cuales aludió con tanta elocuencia en la sesión pasada el señor diputado por la Capital, doctor Fassi y que han promovido en el transcurso del tiempo el progreso social y económico de nuestro régimen inmobiliario, resolver todo el problema.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

Si deseamos dar término al antagonismo entre la ciudad y el campo, agudamente expuesto por Kaustky en su libro *La Cuestión Agraria*, como un fenómeno ineluctable y fatal, traducido por la hipertrofia urbana en detrimento de la población campesina, no hay otro camino que organizar y defender la mediana propiedad rural. En síntesis, para el productor auténtico, la tierra que trabaja.

Entre nosotros es éste un viejo problema desde los tiempos de la enfiteusis rivadaviana,

que ha sido exteriorizado hace más de una década en un incisivo informe presentado por el delegado de la Asociación de Cooperativas de Productores Canadienses, en marzo de 1927, a raíz de una misión de estudio en nuestro país. Enuncia las deficiencias fundamentales del proceso de nuestra producción agrícola, no ocultando la extrañeza que le ha causado sus anomalías, como aparece publicado en «La Prensa» del 30 de marzo de 1927, y sintetiza sus conclusiones de esta manera: «el 58 % de la población argentina vive en la ciudad y el 42 % en la campaña. Una vasta horda de no productores se interpone entre el agricultor y el último mercado; sólo un 20 % de los colonos son propietarios. Las rentas que pagan los agricultores las entregan extrayéndolas de sus cosechas, y son rentas excesivas. El crédito bancario no llega a los colonos; mientras éstos viven miserablemente, los exportadores de cereales son muy poderosos y ricos, y no hay ningún sistema de crédito cooperativo».

Severas palabras que no podríamos repetir hoy en toda su extensión, pero que en buena parte continúan siendo adecuadas a la suerte de los trabajadores de la tierra, sobre todo comparativamente si se tiene en cuenta que en Canadá sólo el 34 % de los colonos son arrendatarios, y que en nuestro país se hallan en esa situación el 63 por ciento.

Se advierte entre las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales un desequilibrio evidente: aquéllas, como se afirma en un estudio reciente, experimentan un crecimiento incesante; éstas se mantienen estacionarias. El último censo de la provincia de Buenos Aires nos da la razón: demuestra que en 14 ciudades con más de 50.000 habitantes, se concentra el 43 % de la población, mientras que en 1914 las mismas ciudades representaban el 34,45 por ciento.

La concentración de la población en las ciudades es un fenómeno universal que obedece a múltiples y complejas causas, a punto tal que un sociólogo eminente, Lester Ward, ha elevado ese hecho a la categoría de una ley, que denomina ley sociológica fundamental o ley de la parsimonia o de la ínfima resistencia. Pero aun cuando sea un fenómeno universal, es de observar que el ritmo con que se opera en nuestro país es francamente alarmante.

Así, según las estadísticas publicadas por la Unión Industrial Argentina, en 1914 la industria ocupaba 1.240.000 personas; en 1938 esas cifras se elevaban a 2.600.000; en tanto que la agricultura ocupaba en 1914, 880.000 personas, y en 1938 sólo 1.050.000.

Pero más impresionantes aún son los cálculos de distribución de la población. En 1914 la población de las ciudades alcanzaba a 4.573.000, y en 1939 se eleva a 9.580.000, lo que significa un crecimiento de 109 % para la población urbana. Aun cuando fueran excesivas las estadísticas mencionadas, contrastan fuertemente con la población rural que ascendía en 1914 a 3.312.000 y se calcula en la actualidad en 3.365.000.

No podrá motejarse de temeraria la afirmación del reputado estadígrafo Alejandro E. Bunge que colocó como epígrafe de un artículo, aparecido en la revista «Economía Argentina» de diciembre de 1938, este título paradójico: «La agrícola argentina, país de población urbana» cuando se analizan las cifras estadísticas de nuestra población, como lo ha expuesto Della Paolera en un estudio de la población de la «gran Buenos Aires», integrada por la Capital Federal y sus alrededores provinciales, que constituirían así una población formada por 3.592.910 habitantes, creciendo solamente los grandes suburbios de la aglomeración bonaerense de 1914 a 1938 en la siguiente proporción: de un total de 440.444 a 1.127.000.

Estos datos, más elocuentes que cualquier exposición por ponderativa que fuese, señalan un rumbo y exhiben el desequilibrio funcional de nuestro crecimiento demográfico. Aun cuando, como se ha dicho, es un fenómeno mundial, no es menos cierto que es motivo de serias preocupaciones si se tiene en cuenta nuestra organización económica y técnica, de prevalencia de la industria agropecuaria.

Es exacto que el trabajo rural se lleva a cabo cada vez más con la intervención de medios mecánicos que reducen considerablemente el empleo de brazos, pero no deja de tener el valor de un postulado que a la despoblación de la campaña sigue indefectiblemente el empobrecimiento colectivo, amén de la dolorosa consecuencia social que por implicancia supone.

Hay que orientar, dentro de lo posible, a nuestra juventud desde la niñez hacia las tareas rurales. Es lo que preconiza una meritoria asociación que con el título de «Amigos del Campo» ostenta este sugestivo lema: «poblar los campos y descongestionar las ciudades». A su iniciativa, y bajo la presidencia del doctor Enrique Pietranera, se convocó el I Congreso de Instrucción Primaria Rural, reunido en esta Capital el 6 de julio de 1938, cuyos postulados esenciales están dados en estas conclusiones: crear la escuela rural diferencial, con orientación agraria y colonizadora, formando

para tal objeto el nuevo tipo de maestro que reclama tal empresa educativa, y combinar la acción educativa con la acción colonizadora del Estado mediante la creación de un consejo nacional de colonización que lleve a cabo el ideal de Alberdi y Sarmiento, «educar para poblar».

También el Congreso a que aludo, al proponer la transformación de la escuela primaria rural adaptada al paisaje, presupone la existencia del maestro capacitado para esa función, que actualmente no existe sino en escaso número, o sean los egresados de la Escuela Normal Agropecuaria de Alberdi, abogando, en consecuencia, el Congreso para que las escuelas normales sean convertidas en escuelas normales agrarias unas y en escuelas de artes y oficios otras, según la zona de influencia de cada una de ellas.

Ahora bien; surge con claridad meridiana que no hay sino un método para despertar vocaciones y afinar aptitudes creadoras en el hombre dispuesto para la empresa colonizadora, y es el de vincular la escuela con el agro. Así lo ha entendido un entusiasta y destacado propagandista de la escuela rural —me refiero al doctor Federico Gándara— que dirige con desinterés ejemplar y sano patriotismo, la Colonia Escuela Argentina, que funciona en Gándara, provincia de Buenos Aires, la que constituye un magnífico ensayo de escuela-hogar de educación integral.

La escuela rural complementada por la colonia-escuela y la posibilidad del acceso a la propiedad de la tierra del egresado, técnica y moralmente capacitado, constituyen los apogemas sustentadores de toda ley de colonización que contemple integralmente los dos elementos fundamentales en la colonización racional: el hombre en posesión de la técnica agraria y la tierra al alcance del hombre. Estos principios han sido preconizados por prestigiosos maestros, así el profesor José Lubertino, de la Universidad Nacional de La Plata, comenzaba su conferencia acerca de la enseñanza agrícola en la República Argentina, recordando el perfeccionamiento en los métodos de explotación agrícola introducidos por la educación agraria, desde la superior, como en el caso del genio profundo del genetista Wilsson Ehle de Svalof, que ha conseguido para Suecia un aumento de la producción triguera de \$ 15.000.000 m/n. anuales, hasta los resultados evidenciados por un concurso de trigo de *pedigree* organizado por la Compañía de Ferrocarriles de Buenos Aires, donde se oyeron es-

tas alentadores palabras: «Una vez más se han comprobado las ventajas de la técnica al servicio de nuestra agricultura y en un año agrícola netamente desfavorable como el anterior —se refiere al año 1929— sólo los agricultores progresistas han logrado cosechas elevadas y de alta calidad.»

También abunda en semejantes ideas el profesor Julio R. Barcos, de notoria versación y conocimiento en los problemas educativos, quien en su carácter de secretario del I Congreso de Enseñanza Primaria Rural, expone la necesidad de dotar de internados rurales a los lugares apartados, con estas palabras: «De acuerdo a la conclusión sobre la adaptación de la escuela primaria rural al panorama geográfico, se desprende la necesidad de elaborar un plan claro sobre fundación de escuelas rurales, con internados en los lugares más apartados, refundiendo las existentes de vida precaria y de semiinternado en el resto del país.»

Es para mí satisfactorio poder sentirme acompañado en esta parte de mis observaciones por la palabra del señor ministro de Agricultura, quien en su discurso de la sesión anterior, se ha pronunciado a favor de la escuela primaria de carácter rural, diferenciada de la urbana, asentando sobre esa base la educación técnica lograda por medio de la escuela especializada. Esta es la oportunidad de que, cuando sea al pasar, diga que aparece también como necesidad ineludible, organizar nuestra enseñanza agrícola en sus distintas categorías y ciclos. Últimamente hemos recibido un excelente estudio de una comisión especial asesora de enseñanza agrícola, que preside nuestro distinguido colega por Buenos Aires, el señor diputado don Daniel Amadeo y Videla (h.), quien ha redactado un proyecto de ley procedido de una substanciosa exposición de motivos.

Constituye uno de los puntos centrales de un buen sistema agrario resolver el problema de la enseñanza técnica y profesional y en una publicación reciente de la Oficina Internacional del Trabajo, de 1938, se encarece su estudio, recordando las recomendaciones sancionadas por la Conferencia Internacional de 1921, concebida en los siguientes términos: «invitar a los Estados miembros de la organización a desarrollar la enseñanza profesional agrícola y a colocar en particular a los asalariados agrícolas en condiciones de beneficiarse de esa enseñanza en la medida que lo hace el resto del personal agrícola». Se reitera la cuestión en 1925, y más tarde la conferencia adoptó una recomendación

semejante en 1927; y en 1930 el delegado obrero francés, Mr. Jouhaux, en la conferencia internacional de ese mismo año, adhiere a la proposición de difundir entre los niños y los adolescentes los rudimentos de la enseñanza agrícola rural, para obtener una instrucción general y profesional apropiada a una vida real y plenamente humana.

No obstante la importancia medular de esta cuestión, no ha tenido en el despacho la franca y deseable acogida. La disposición del inciso i) del artículo 7º resulta insuficiente y pequeña y en tal sentido, en la discusión en particular, propondré en reemplazo el texto del inciso b) del artículo 3º y del b) del artículo 4º, presentado conjuntamente con el diputado Arbeletche, que guarda semejanza con el artículo 34 del proyecto del señor diputado por Buenos Aires, don Francisco Eyto, combinando la acción educativa rural con la desarrollada por el Consejo Nacional de Educación para quien se pide representación.

Se pronuncia, asimismo, por este plan, la Asociación Amigos de la Patagonia, presidida por el doctor Aquiles B. Igobone, en nota dirigida a la Honorable Cámara, cuyo pensamiento central solicito que se inserte en el Diario de Sesiones.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pita). — Como hay asentimiento, se hará la inserción solicitada. (1)

Sr. Pinto (h.) — Por último, se pone de relieve la necesidad de la formación de una clase campesina eficiente y culta, en un interesantísimo artículo aparecido en «Noticias Gráficas» el 16 del corriente mes. En lo fundamental expresa: «Pero entendemos que el trabajador nativo no puede quedar excluido por la circunstancia de inferioridad en que se halla, de la distribución de la tierra. La enseñanza agrícola y la creación de las escuelas colonias estaban destinadas, precisamente, a capacitar a aquél, preparándolo en el conocimiento técnico de las labores del campo, acordándole por su competencia el apoyo económico oficial o privado indispensable; y, por último, a disciplinar con el mismo objeto a un considerable grupo social que en el presente no tiene destino.»

Y refiriéndose a la eliminación que del artículo 4º de mi proyecto se ha hecho, expresa: «La eliminación de este artículo en el despacho de la Comisión de Legislación Agraria, artícu-

(1) Véase pág. 480.

lo similar al contenido en los proyectos de los diputados Eyto y Horne es, a nuestro modo de ver, una poda sensible de proyecciones futuras lamentables, al principio social de la ley de colonización que el país está reclamando».

Pido perdón por esta exposición, hecha metódicamente, pero que ha adquirido una extensión que no está en mis hábitos parlamentarios. Trataré de resumir la última parte con la convicción de que algunas ideas que se apuntan interesan a la Honorable Cámara, completan e integran el proyecto redactado por la comisión y le dan su verdadero sentido agrario que perseguimos, de educar al colono y de hacer posible de ese modo que llegue a la explotación de la tierra en las mejores condiciones posibles.

Pero quiero señalar una omisión sensible del despacho.

Está vinculada específicamente a la colonización, el fenómeno de las migraciones, que ha sido ampliamente estudiado por la Oficina Internacional del Trabajo. Hubiera sido de fecundas consecuencias, traducido en un firme propósito de poblar al país, crear un vínculo entre el Consejo Nacional Agrario y la Oficina Internacional del Trabajo.

En la Conferencia del Trabajo de los Estados de América —a la cual asistieron algunos diputados nacionales, entre los que se encontraba mi distinguido colega el señor diputado Dickmann— celebrada en Santiago de Chile del 2 al 14 de enero de 1936, precisamente a indicación del delegado gubernamental argentino, doctor Unsain, se resolvió sancionar una declaración que establece la vinculación indispensable entre todo sistema de colonización y el régimen de las migraciones, en la inteligencia de que la República Argentina, como los Estados de América, forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. La resolución aprobada por la Conferencia dice así en substancia: «Rogar al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo que solicite de dicha oficina la realización de estudios especiales relacionados con la inmigración de Europa a América. Esos estudios deberán encarar el problema en sus diversos aspectos de inmigración individual y reclutamiento colectivo espontáneo o dirigido y muy particularmente desde el punto de vista de la conexión entre la inmigración y la colonización privada u oficial, señalando las condiciones de preparación para la receptividad de los inmigrantes.

«Pedir al Consejo de Administración de la

Oficina Internacional del Trabajo que, cuando lo estime oportuno, inscriba el asunto en la orden del día de la Conferencia anual, a fin de presentar un proyecto de convención o de reglamentación en que, entre otras cosas, se señalen las bases de tratados bilaterales o plurilaterales entre países de Europa y América sobre inmigración, colonización y trabajos».

Dió cumplimiento a este voto la Oficina Internacional del Trabajo, quien encomendó a un grupo de especialistas integrados por Fernando Maurette y Enrique Siewers, el estudio y la investigación de la cuestión, publicándose en la Revista Internacional del Trabajo, números de marzo y abril de 1937, un profundo análisis consagrado a la inmigración y colonización en el Brasil, Argentina y el Uruguay.

La parte dedicada a nuestro país es de singular interés y revela un análisis objetivo y certero del problema. Se establece como recomendable aspiración, que toda política inmigratoria, sobre todo de emigraciones europeas, formadas por campesinos afines con nuestro medio, debe desarrollarse correlativamente con un plan de colonización que dé facilidades al agricultor que no tiene otro capital que sus brazos. Dedicó un severo comentario a la colonización particular caracterizada por la especulación y la inflación de los valores venales de la tierra, con estas palabras que me permitiré leer. Las opiniones de la Oficina Internacional del Trabajo, no solamente se refieren a la colonización privada, sino también al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo en 1936 y aseguro que su lectura no es pérdida de tiempo, porque se hacen reparos y se formulan observaciones que debemos tener muy en cuenta en el curso del debate.

Dice así sobre colonización privada: «Salvo raras excepciones, esta obra de colonización consistía en comprar tierras, parcelarlas y venderlas a plazos, generalmente de seis anualidades, a cultivadores deseosos de convertirse en propietarios; una simple operación de crédito. Esta operación tenía más fracasos que éxitos, aunque rara vez en detrimento de la compañía, que empezaba por cobrar a cuenta de la parcela una cantidad apreciable, pudiendo a veces representar varias anualidades, y que, al primer incumplimiento del colono, recuperaba todos sus derechos sobre el lote, apropiándose también de las construcciones y mejoras realizadas por el colono, para volver a venderlo en las mismas condiciones a otro solicitante. Se citan casos de tierras que han sido así vendidas cinco o seis veces consecutivas.

Pero, aunque tales procedimientos asimilables a veces a una estafa, y la ausencia de toda ayuda técnica a los colonos, explican en parte el poco éxito logrado por la colonización privada; no hay que olvidar que, desde principios del siglo, la valorización especulativa de la tierra ha sido un obstáculo a su subdivisión.

Por otra parte, en el informe dedicado al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en 1936, se formulan observaciones de rigurosa actualidad porque son los mismos principios consignados en el despacho de la comisión y aluden a la forma de adquisición de las parcelas, estableciendo que el colono debe estar en posesión de un capital inicial mínimo de tal cantidad que es imposible prácticamente realizar una colonización por lo menos con colonos provenientes del centro de Europa. Desde luego, estas observaciones formuladas por el colono inmigrante, pueden hacerse extensivas también al colono nativo.

Dice así el estudio de la Oficina Internacional del Trabajo: «Refiriéndonos todavía a ese proyecto, como ha podido observarse, la dirección del instituto está facultada para concertar arreglos con agricultores domiciliados en el extranjero, o con organismos responsables con miras a la instalación de esos agricultores en una colonia nacional, ya como propietarios desde el primer momento, si pueden entregar el 10 % del valor del lote, ya como arrendatarios con derecho de opción de compra, si no disponen de recursos para pagar ese primer plazo. No cabe duda de que esta generosa disposición dará acceso a un contingente notablemente mayor de aspirantes a la emigración. Pero, aun a riesgo de pasar por pesimistas, debemos tratar de dar una cifra del capital de explotación necesario que, en uno u otro caso, habrá de poseer el colono, según los términos del proyecto, en el momento de su instalación. Con sujeción a datos que nos han sido amablemente facilitados por personas que cuentan con larga experiencia en la colonización, el capital de explotación o capital inicial, como se le quiera llamar, se eleva a una suma bastante respetable. En una propiedad de 75 hectáreas en una de las provincias de la región central, habría que contar, en efecto, con unos 1.500 pesos, que es lo que viene a representar la adquisición de los elementos de labranza, de las semillas, de un carro, de los animales de trabajo y las aves de corral. A esto se ha de agregar, para una casa de dos piezas, con pozo, alambrado exterior y algunos cerraderos indispensables al in-

terior, (el alambre cuesta de 0,60 a 1 peso el metro) unos 2.000 pesos más. Contando luego unos 1.200 pesos solamente para las necesidades de sustento y sanitarias de la familia durante un año, se llega a un total de unos 4.700 pesos, dejando de lado los gastos del viaje de Europa a la Argentina.»

Termina el estudio referido recomendando que se trate de reducir el capital inicial de explotación para que sea más posible el acceso del trabajador a la tierra.

Por último, voy a consagrar breves minutos a analizar la parte del despacho dedicada a tierra fiscal. El despacho, con sensible retardo, dispone en el artículo 72 que la incorporación de la Dirección de Tierras se efectuará en el momento que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente dentro de un plazo máximo de tres años, y recién una vez incorporada la Dirección de Tierras dependerá del Consejo Agrario Nacional, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167, 5.559 y 10.247.

No es el momento de entrar al análisis de la ley de tierras de 1903, ni de la forma de su aplicación en sus dos aspectos de venta y arrendamiento, solamente expresar el deseo de que la sanción de la ley de colonización ponga término a la sucesión de decretos contradictorios sobre esta materia y se sujete la tierra pública a un régimen uniforme y estable. Resulta, pues, incomprensible el retardo que supone la incorporación de la Dirección de Tierras al régimen de la ley de colonización e incongruente la subsistencia de dos sistemas antitéticos: el del despacho de la comisión y el de la ley de 1903, tanto más reprochable cuanto que se calcula en 77.000.000 hectáreas, distribuidas en las diez gobernaciones nacionales, el patrimonio de la tierra fiscal en poder del Estado, de las cuales 8.000.000 de hectáreas están cubiertas de bosques que contienen las más variadas especies. En los territorios del Norte: Chaco, Formosa y Misiones, la riqueza forestal puede apreciarse en 7.000.000 de hectáreas y abunda allí la especie arbórea de mayor importancia industrial, el quebracho colorado, que produce el tanino, materia de que somos principales productores en el mercado mundial. Tan extraordinaria riqueza es necesario cuidarla con un celo especial para fines de utilidad social indudable, si se tiene en cuenta que, según informaciones oficiales, de los 119.000.000 de hectáreas que constituyen los territorios nacionales sólo se han mensurado hasta fines de 1937 unos 72.000.000, faltando mensurar, por consiguiente, 47.000.000. En 1937 y 1938 se han intensificado la mensura

y subdivisión en lotes, impulsándose con métodos modernos los levantamientos de exploración y con el concurso del Instituto Geográfico Militar se ha resuelto llevar a cabo un levantamiento aerofotográfico. Empero, el despacho como se ha dicho, no llena un vacío de la ley de 1903. Y voy a examinar un punto de importancia extraordinaria al que asigno gravedad.

La ley de 1903 no obstante sus excelencias, permite el acaparamiento de la tierra fiscal por compañías o sociedades, algunas extranjeras, hecho que se ha denunciado también en documentos oficiales, como en los considerandos del bien inspirado decreto del 17 de junio de 1937, subscripto por el ex ministro de Agricultura doctor Cárcano al referirse cómo al amparo del artículo 9º de la ley número 4.167, que dispone que el arrendatario que haya cumplido las condiciones del contrato tendrá derecho a comprar hasta la mitad de la extensión arrendada, mediante simulados arrendatarios, las compañías o sociedades de tierras lograban burlar la ley. Y eso consta en un decreto oficial cuyos considerandos leeré en la parte substancial, porque señalan a la Cámara la necesidad indudable de articular alguna disposición legal, como lo ha proyectado el señor diputado Fassi, o la que propondremos conjuntamente con el señor diputado Anastasi, para evitar que esos hechos persistan y que el latifundio siga imperando en esa parte del país.

Dice así el decreto: «Que las ventas que en su oportunidad se efectuaron a favor de arrendatarios con contratos celebrados en las condiciones indicadas, beneficiaron en unos casos a pobladores meritorios, y en otros favorecieron a compañías acaparadoras que mediante interpósitas personas lograron burlar los propósitos fundamentales de la ley mencionada y aumentar por ese medio las extensiones de que eran poseedoras; que para impedir en lo posible que se repitan las violaciones a las disposiciones de la ley número 4.167 y se constituyan grandes latifundios, entre otras medidas de previsión se limitará el beneficio de la venta a los pobladores de arraigo que realicen una explotación independiente y ajustada a las disposiciones reglamentarias en vigor, que tengan su domicilio real en la parcela o su residencia efectiva y permanente en el territorio».

De acuerdo con los considerandos se dictaron los artículos 10 y 11 del decreto que tiende a impedir que la tierra fuera a parar a manos de las sociedades anónimas. Pero evidentemente el decreto no ha podido ponerse en vigor en toda su extensión por los óbices legales que se

han planteado, motivo por el cual vuelvo a insistir en que es capital, si queremos hacer una verdadera ley de colonización, no simplemente jugar a la colonización, para impedir la formación de grandes extensiones territoriales, sobre todo en el Norte y Sur del país en base a tierras fiscales que caen irremisiblemente en poder de sociedades o compañías extranjeras.

En Chile aconteció exactamente lo mismo que aquí. Todas las tierras australes de Chile fueron otorgadas en arrendamiento o en venta a compañías o sociedades anónimas, que colocaron a esos territorios en las peores condiciones sociales y económicas, a punto tal que en la ley de 1935 ha sido necesario tener en cuenta esta circunstancia para modificar substancialmente ese régimen incongruente, que no arraiga población, ni permite el acrecentamiento de riqueza.

No es mi propósito pronunciar un discurso con extensión extraordinaria o singular, sin que esto importe una crítica a quienes lo hagan, por ello dejaré de lado otras consideraciones. Recomiendo a los señores diputados la lectura de un interesante estudio cuyo comentario in extenso omito, de un destacado economista chileno, Moisés Poblete Troncoso, quien alude en su enjundioso libro *El problema de la producción agrícola y la política agraria nacional* a este problema de la zona austral de Chile, que es el problema de la tierra fiscal del Norte y Sur de la República Argentina. Hay que reaccionar contra esa política de abandono y establecer reglas y límites para la adquisición de la tierra por compañías y sociedades anónimas, para impedir el latifundio, transformando paulatinamente el desierto fiscal en cuenca receptiva del flujo migratorio y en el hogar de los nativos que cifran su esperanza en medrar de la tierra abonada por su propio esfuerzo y conquistada por el amoroso tesón del colono propietario.

Es preciso combatir el latifundio racional y sistemáticamente, puesto que la concentración de la propiedad en gran escala es una de las mayores desventajas y causa de la despoblación campesina, de tal modo que esta conclusión ha sido expresada en forma de ley por Teodoro von der Goltz. La emigración crece paralelamente a la propiedad latifundiaria y disminuye con igual paralelismo en relación a la pequeña propiedad. Para concretar más ese paralelismo, otros suelen formularlo así: A un aumento en proporción aritmética de la propiedad latifundiaria corresponde un aumento en proporción geométrica de la migración campesina.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

En la discusión en particular propondré las modificaciones sugeridas en el curso de mi exposición que no han sido inspiradas únicamente por la sabia máxima de «acuérdate de desconfiar de lo humano», sino en el propósito de colaborar en la sanción de este despacho, quizá uno de los de mayor enjundia que ha tenido este Congreso a su deliberación.

No todo ha sido crítica, aun cuando en algunos momentos pudo decirse con la enérgica expresión de Emerson que los ilustrados redactores del despacho, sin medir la distancia y el carácter experimental de la ley, pretendieron enganchar su carro a una estrella del cielo.

Pongamos, señores diputados, este debate auspicioso para la República al amparo del designio de Rivadavia, que antes de su ley de enfiteusis, en 1812, con la certera visión de nuestro porvenir, disponía la entrega de suertes de tierra de pan llevar, a los pobladores empobrecidos, porque era un escándalo su desamparo, decía, ante la razón y la justicia.

Sea el pensamiento grávido y secular de los hombres de Mayo el que nos inspire al discurrir y sancionar la ley agraria; y sea eso lo que pueda y quiera realizar el Congreso argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Infante. — Pido la palabra.

Como el señor diputado por la Capital, que hablara en nombre del bloque antipersonalista, manifestó que éste votaría favorablemente el despacho en consideración, he solicitado la palabra para expresar por qué razones voy a votar en contra del proyecto.

El problema agrario es complejo, complejísimo. Mejor se podría decir que está formado por una serie de problemas, y que se vincula con todos los fundamentales de la vida social: el régimen jurídico de la propiedad de la tierra, el de las formas de su venta y de su explotación, el de la familia y de la natalidad, el sistema impositivo, el salario, la desocupación, el maquinismo, la superproducción, el precio de los productos agropecuarios y su comercialización, etcétera.

¿Y cuál es el medio que se propicia, con el apoyo de todos los sectores, como solución para este problema?

La sanción de una ley que, en síntesis, importaría la creación de un nuevo organismo autónomo, el Consejo Agrario Nacional, que reuniría a la Dirección de Tierras y a las secciones respectivas de los Bancos de la Nación e Hipotecario Nacional; y la reglamentación de una forma especial de expropiación, que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional.

Cualquiera podría creer que estábamos en presencia de un peligro grave e inminente, que nos obligara a improvisar un remedio, aunque fuera heroico, o aun cuando supiéramos de antemano que sería ineficaz.

La pintura que se ha hecho de nuestra campaña no coincide con la realidad, por lo menos en la región agrícola y ganadera. Nuestra campaña es próspera. Sus pobladores empiezan por estar bien alimentados. Hay carne y pan de primera calidad y abundantes. Los hijos de los inmigrantes superan en estatura a sus padres y patentizan que están mejor nutridos.

He tenido una verdadera complacencia al ver cómo comían las carnes asadas argentinas los marinos norteamericanos que nos visitaron hace poco. Combinaciones económicas, comerciales y financieras, podrán impedir que los Estados Unidos compren nuestras carnes, pero no han podido evitar que sus marinos nos hicieran la impresión de que parecería que los nuestros comieran mejor.

Esa es quizá nuestra fuerza más poderosa. No creo que haya en el mundo, pueblo mejor alimentado, entiéndase bien, con mayor abundancia, que el argentino.

Uno de los grandes inconvenientes de la complejidad del problema que está en debate, es la facilidad con que en seguida se toma por un desvío y la asociación de ideas nos aparta de su aspecto esencial. Volvamos a él:

El sistema de colonizar vendiendo la tierra al poblador ha sido practicado siempre en nuestro país. En ningún momento ha dejado de haber tierra ofrecida en venta. En la provincia de Santa Fe ese fué el sistema con el que se fundaron las primeras colonias. No fué otro el que pusieron en práctica Aarón Castellanos, Guillermo Lehmann y Juan Bernardo Iturraspe. Con ese sistema se llevó a cabo la colonización completa de los departamentos San Martín, San Cristóbal, Belgrano, Castellanos y Las Colonias; y la de parte de los departamentos San Javier, San Justo y Reconquista. Más de 20.000 propietarios de lotes formados por tres o cuatro concesiones de dieciséis cuadradas cada una. No hay región más floreciente. Esas con-

cesiones están mezcladas con estancias de gran extensión verdaderamente ejemplares, entre cuyos propietarios podrían ser recordados Kemmis, Lehmann, Emilio Ortiz, Ignacio, Demetrio y Bernardo Iturraspe, Pedro Araya, los Boero, los Saá Percyra, los Palacios, por no citar sino los viejos.

A la lista de latifundistas que se nos levara el otro día podría oponerse otra de los primeros pobladores, que roturaron sus tierras con el winchester al brazo, y cuyos descendientes las tienen arrendadas. ¿Con qué derecho se les discutiría hoy que procedan así? ¿Cómo se va a negar a los hijos y a los nietos de los que arrancaron aquellas tierras al desierto y las llamaron a la civilización, el derecho a obtener un legítimo beneficio de aquel esfuerzo de sus progenitores, que contribuyó no sólo a su provecho particular, sino también al engrandecimiento del país?

¿Por qué se cambió el régimen? Por una razón muy sencilla y muy natural. Al principio no bastaba con ofrecer las tierras en propiedad a los colonos; era necesario habilitarlos, darles la semilla y hasta mantenerlos, a veces durante años, si las cosechas faltaban. Pero luego, cuando hubo seguridad, los propietarios no necesitaron desprenderse de la propiedad, y los colonos no la exigieron. Por otra parte la tierra había alcanzado un valor bastante elevado, y no se trataba ya de una aventura que corrían juntos colonizador y poblador. La experiencia estaba hecha. La habían hecho otros. El colono podía, puede hoy, podría mañana aunque el proyecto se aprobara y la ley se pusiera en ejecución, optar, entre aspirar a convertirse en propietario de tierras inferiores, por su calidad o por otras causas, de tierras inseguras, o limitarse a ser arrendatario de tierras óptimas, tan buenas como las mejores del mundo, seguras, y en las que no había más que seguir la ruta trazada y el camino abierto por otros, hacia el éxito indudable.

Es que los tiempos han cambiado

En la provincia de Santa Fe la primera colonia fué fundada en el año 1856. Se la llamó «Esperanza» y estaba situada sobre la margen derecha del río Salado y a unas siete leguas al Noreste de la capital. En el año 1872, cuando el inspector nacional de las colonias agrícolas, don Guillermo Wilcken, elevó al presidente de la Comisión Central de Inmigración su informe sobre el estado de las colonias de esa provincia, existían ya treinta y una, con trece mil setecientos treinta y siete habitantes, de los cuales escasamente dos mil eran argen-

tinios. Hasta el año 1870 no se fundó la primera colonia del Sur.

La terminación de la guerra del Paraguay fué una causa indirecta del incremento de la colonización en Santa Fe. Muchos ex soldados se convirtieron en colonos. Pero el elemento que sirvió de base fué el extranjero. Santa Fe que tenía 89.117 habitantes en 1868, llegó a 899.640 habitantes en 1914, y la Dirección General de Estadística calcula su población actual en 1.450.000.

La Argentina que importaba harina, hoy tiene 6.000.000 de toneladas de sobrante de trigo, cuya mayor parte no puede exportar a ningún precio, no obstante venderse en Europa a pesos 30 el quintal y ofrecerlo nosotros a \$ 4,80 moneda nacional.

Ha llegado nuestra agricultura a necesitar la protección del Estado. Bien es verdad que en Estados Unidos alcanzan a 1.000.000.000 de dólares los subsidios y beneficios que reciben los agricultores. Pero en nuestro país, lo que parecía natural en otros casos se nos presenta como ilógico en éste.

Téngase presente que una vez tomado el camino de proteger una industria es muy difícil dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que en definitiva se obtendría con la realización de las finalidades de este proyecto? ¿Abaratar el precio de costo? Pero si eso no es lo que preocupa en el momento presente. Si el excedente de nuestros productos se vendiera a precio remunerador, la situación sería muy distinta.

Ha dicho alguien que el problema social no está en la segunda de las cuatro partes en que se divide la economía política: producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza, que no se trataría de lograr una mejor distribución de la riqueza sino de obtener una mayor producción. Pero, entre nosotros el problema no es ése, porque no es interno. Si con el sistema actual Santa Fe, según he dicho, ha podido llegar de menos de cien mil a un millón y medio de habitantes, no puede decirse que haya fracasado.

El problema es externo. Si los países que antes nos compraban nuestros productos ahora prefieren, o necesitan por causas propias, producir su trigo, por ejemplo, que les cuesta seis veces más, y aun agregar a la harina un veinte por ciento de otros cereales o leguminosas, en lugar de mezclarla con esa proporción de trigo argentino, el problema está ahí.

Claro es que esto no quiere decir que no haya otros puntos, sino que en nuestro sentir éste es el esencial. Veamos otro importantísimo.

Al ser firmado el tratado de Versalles, ha dicho un sagaz historiador, nadie vió a un personaje que se sentaba en sitio preeminente entre los generales y los plenipotenciarios, por derecho propio, porque en realidad él había ganado la guerra.

Ese personaje era la máquina que se convertía en ama y señora del hombre dejando de ser su esclava.

El maquinismo es un problema social de muy difícil solución.

No podemos oponernos al progreso, pero la libertad de la industria, no puede traducirse en el derecho de arruinarse, arruinando. En cuanto un país tiene un exceso de máquinas; cuando sus industrias, tienen máquinas que las hacen capaces de producir, o de prestar el servicio al que están destinadas, en forma que exceda a la demanda, el desequilibrio produce trastornos tan graves que es necesario remediarlos y de inmediato. No se diga que el libre juego de la oferta y la demanda restablecerá el equilibrio en esa lucha por la supervivencia del más apto, con beneficio general, porque mientras tanto habrá podido perecer toda una generación, y si la actual no tiene derecho a hipotecar al futuro, tampoco es justo que se la sacrifique en homenaje de las que vendrán.

En el año 1912, hubo en Santa Fe una gran huelga agraria. Los arrendatarios no podían soportar los arrendamientos que habían sido llevados por encima de lo justo; y se hacía aún más pesada la situación de los colonos por una serie de exigencias que se referían a la trilla, al embolsado, a la selección del cereal que se había de pagar como arrendamiento, etc. El gobierno de Santa Fe que presidía el gobernador Menchaca, y cuyo ministro de Gobierno era el doctor Antonio Herrera designó una comisión integrada por el entonces vicegobernador doctor Ricardo Caballero, y los doctores don Toribio Sánchez y don J. Daniel Infante. Esta comisión elevó un informe en el que puntualizó las condiciones básicas que debían ser observadas en todos los contratos a celebrarse para los arrendamientos de la tierra, y la solución fué tan acertada que las cosas se encauzaron de inmediato: los arrendamientos del 33 por ciento bajaron al 28 por ciento, llegando en Córdoba hasta el 25 por ciento y la mayoría de sus conclusiones fueron más tarde incorporadas al texto de la ley de arrendamientos agrícolas. Este movimiento legislativo ha continuado y ha ido asegurando en forma armónica las relaciones entre patrones y colonos en una corriente de solidaridad.

Poco influyen en la solución de estos graves problemas los discursos por elocuentes que sean; poco influyen aún las mismas leyes por bien inspiradas que estén, y es por ello que creo no debe hacerse llegar hasta los interesados, ilusiones, que no tienen los mismos que apoyan este proyecto.

Estas materias hay que tratarlas con mucho cuidado. Con mucho conocimiento de causa.

No se puede improvisar una gran experiencia, sobre una hipótesis, más o menos teórica, que podría resultar muy dolorosa.

El régimen jurídico de la propiedad es de lo más fundamental que hay en una organización social. Las aspiraciones que el proyecto exterioriza, son atrayentes, pero veamos las posibilidades de su realización.

Veamos lo que pasaría al día siguiente de convertirse en ley el proyecto: por de pronto se habría recargado nuestra ya pesada burocracia, ¿y qué podría hacer el Consejo Agrario Nacional, qué no hubieran podido hacer sin esta ley la Dirección de Tierras y los Bancos de la Nación e Hipotecario Nacional?

Lo único sería la expropiación de ciertas tierras en el caso en que no pudiera adquirirlas en las condiciones especificadas. Es decir, que satisfechas las exigencias establecidas, el Consejo Agrario Nacional podría pedir al Poder Ejecutivo la aprobación para expropiar las tierras que juzgara preciso incluir en los planes colonizadores, a cuyo objeto se las considerara de utilidad pública. Este precepto de la ley sería declarado inconstitucional por nuestros tribunales, como lo sería también el que determina lo que se ha de pagar como indemnización, pues sabido es que ésta la fijan los tribunales.

En fin, señor presidente, a qué insistir, si en los discursos de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, en sus críticas, en sus reservas y hasta en su falta de ilusión al apoyarlo hay argumentación bastante para no votar a favor del proyecto. Este proyecto que en síntesis importaría la creación de un organismo para la realización de un magno fin, por un medio inadecuado.

Mientras nuestro país siga brindando a sus habitantes y a los que quieran venir a él las posibilidades económicas actuales, nada aconseja un cambio de régimen tan profundo, cuyas repercusiones nadie podría prever.

Aunque creo que no hay que alarmarse, pues si llegara a producirse la primera expropiación, de acuerdo con el proyecto, el Consejo Agrario Nacional tendría su primer pleito, y resultaría

así en definitiva, que se habría creado todo un ente autónomo de grandes proporciones para eso, para que tuviera un pleito.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Guillot. -- Pido la palabra.

Este debate se reanuda en una circunstancia especial, que acaso dé un sentido nuevo a la discusión.

Se encuentra ausente del recinto el señor ministro de Agricultura, autor y defensor del proyecto y, según informes de los diarios, su ausencia obedece a una conferencia con el presidente de la República para tratar la repercusión que pueda tener sobre la economía argentina una baja en el precio de los cereales que, según un órgano informado de la mañana, ha descendido a un nivel no registrado de 350 años a esta parte.

Quiere decir que en tanto el Congreso debate una ley de colonización, los hechos colocan un acento nuevo sobre el problema agrario argentino, trasladándolo de su aspecto de partición y distribución del suelo, a su aspecto de producción, de precio y de colocación de los productos.

Iniciado el debate, puesta en marcha la discusión sobre esta ley, necesario es que la continuemos; pero insisto en que este hecho resaltante coloca el acento del problema agrario sobre un punto no previsto por este proyecto de ley.

Mi intervención en este debate se justifica por dos razones: la primera y principal, porque las observaciones formuladas en general a un proyecto de ley llamado a tener, según aspiración de sus autores y exposición de su artículo inicial, una profunda y extensa repercusión sobre el desenvolvimiento de la economía argentina, justifica la exposición de dudas y perplejidades que provoquen aclaraciones y precisiones tendentes a explicar mejor los motivos, a especificar los fines y a determinar los medios excogitados por los autores del proyecto para realizar aquéllos y llevar a cumplimiento estos últimos. En ese sentido me parece que toda exposición que tienda a desentrañar el alcance de preceptos legales, o que llegará a ser legales, por ser juzgados o imprecisos o demasiado generales o que no corresponden ajustadamente a imposiciones de la realidad, favorece la ley y evitará repeticiones inútiles en el debate en particular.

Por otra parte, como me propongo formular algunas sugerencias y agregados a diversas disposiciones del articulado de la futura ley, me

parece que me corresponde, en principio, exponer en general algunos puntos de vista, si quiera sea para justificar una ulterior intervención en particular, y a fin de evitar, al diputado que así lo hace, la situación poco airoso de un merodeador de los debates. Pero tengo una segunda razón, derivada de una especie de compromiso conmigo mismo. Cuando se fundó esta ley, se hizo una apreciación severa sobre las consecuencias del liberalismo y del individualismo económico. Correspondió hacer esa apreciación a mi distinguido compañero de sector, el señor diputado Horne, quien, en la introducción de su discurso que todos hemos escuchado con el respeto merecido, decía que el liberalismo y el individualismo han traído como consecuencia, la explotación del hombre por el hombre y han llevado al trabajador rural a perder sus tareas, a ser un paria dependiente del latifundista, nuevo ser feudal de la organización económica, etcétera.

Tranquilaré a la Honorable Cámara. No me propongo hacer un discurso sobre esta apreciación. Acaso lo hubiera hecho, a no mediar circunstancias que expondré más tarde y que atenúan considerablemente la dureza de los citados conceptos. De otro modo me hubiera sido dado recordar todo lo que debe la civilización contemporánea al pensamiento liberal, a cuyo amparo y a cuya sombra se han organizado las instituciones democráticas que hoy disfrutamos y que permiten la rectificación de los errores de ese mismo pensamiento liberal en el campo económico, al aceptar la intervención del Estado, que ha dejado de ser una entidad parcial y cerrada, para poder convertirse en lo que los partidarios de la escuela intervencionista llaman el órgano supremo del derecho. Hubiera recordado así, colocándome ya en el terreno del liberalismo económico y del individualismo, que la primera repartición de tierras que atribuyó el suelo rural al campesino lo hizo la Revolución Francesa bajo el influjo del pensamiento liberal. Recordaría también que ese concepto, al parecer nuevo de la limitación del dominio, subordinado al interés social, tiene un precedente en el criterio de la utilidad común con que Jeremías Bentham, el corresponsal de Rivadavia, limitaba los derechos individuales aun en el terreno de la propiedad fundiaria. Podría recordar, igualmente, que los discípulos de Cobden propugnaban la libertad de la tierra frente al monopolio, como un término equivalente a la libertad de los productos en el

comercio internacional; y puesto en ese terreno, que ha provocado mayores y, sin duda, justificados reproches, el de la doctrina liberal individualista sobre la libertad de contratación y la libre concurrencia, con todas sus consecuencias, tal vez habría podido recordar que el fundador de la escuela de Mánchester, el mismo Cobden, consideraba que la libertad de contratar no era principio aplicable a los menores, de modo entonces que sólo una defectuosa aplicación del pensamiento liberal a las relaciones emanadas de la vida industrial, podía adjudicar al liberalismo económico la responsabilidad de la situación de los menores en ese período primario de la evolución fabril en la sociedad contemporánea. No lo haré sino para situarme en un solo punto: este liberalismo económico en el último tercio del siglo XIX y comienzos del XX, introdujo una profunda rectificación, no en sus principios, sino en cuanto a la aplicación de sus principios, cuando, ya dándose como fundamento filosófico y jurídico la solidaridad social, que substituía a las teorías del contrato social, la del cuasi contrato con el supuesto jurídico de la causa, o bien, por otros fundamentos adoptados por otras escuelas intervencionistas, aceptó la intervención del Estado como control de la vida industrial y de las relaciones emanadas de la actividad concurrente del capital y del trabajo, haciéndola posible, no como una destrucción del viejo principio de la libertad sino como una expresión nueva más concreta, más generosa y más fecunda de ese mismo principio de libertad.

Las escuelas intervencionistas, de alguna de las cuales la Unión Cívica Radical ha aceptado en la República, principios y fundamentos, corrigiendo en cierto sentido su vieja tradición liberal, especifican que el Estado es el órgano supremo del derecho. ¿Qué Estado? El Estado democrático, el Estado parlamentario, construido a la sombra del vasto y fecundo pensamiento liberal. De manera que si es posible hoy elaborar leyes en que se restringe el concepto tradicional del dominio y se confía al Estado la ejecución de esas leyes, es porque ese Estado ha dejado de ser aquella corporación cerrada del pasado que el individualismo miraba con justificado recelo, porque lo juzgaba como la expresión de una clase, de un sistema de intereses, de un repertorio de prejuicios, pero no como el órgano capacitado para distribuir justicia social. Y en cuanto al

fracaso de la colonización en la República, habría recordado que sería injustísimo imputarle a la concepción liberal de las leyes y los actos de gobierno, que la organizaron. Miembro de un partido político que ha hecho reiteradamente el proceso de los profundos errores y enormes corruptelas cometidos en el manejo de la tierra pública argentina, fácil me sería amplificar e ilustrar la precedente aseveración.

Todo eso hubiera dicho, señor presidente, y hubiera agregado algo más a no mediar una circunstancia verdaderamente tranquilizadora. Este proyecto de ley que debatimos, colocado bajo el signo de una cierta aversión hacia el liberalismo individualista económico, es un proyecto de ley liberal e individualista. El miembro informante, el ilustrado señor diputado por Córdoba, lo fundó con ayuda de dos citas: una de Adam Smith, padre de la escuela liberal, y otra de Bastiat, el economista optimista de las *Armonías económicas*, a quien se nombra ordinariamente como una de las eminencias del pensamiento liberal y cuya vieja concepción, tantas veces irónicamente comentada, de la posible armonía entre los intereses del obrero y del patrón, ha sido retomada contemporáneamente y puesta en circulación con otros aspectos. De manera que no podemos considerar como opuesta al pensamiento liberal y al concepto individualista en principio, una ley cuyos fundamentos no desentonan con el pensamiento de los dos economistas que acabo de citar.

Por otra parte, la concepción de distribuir el suelo y citar pequeños propietarios es un principio individualista y liberal. El señor ministro de Agricultura, cuya ausencia lamento, lo fundaba en la vieja y conocida cita de Young, según la cual se justificaba la atribución de la tierra en propiedad porque una parcela entregada a un arrendatario la convierte en un páramo, y entregado en páramo en propiedad a una persona lo convierte en un vergel. En rigor, sólo la mitad de la cita puede resultar exacta. Hay ciertas frases que son bonitas, están perfectamente concluidas, son de fácil recordación y adornan evidentemente un discurso. Pero ese concepto de Young, no resiste un cotejo con la realidad. ¿Acaso los millones de hectáreas cultivadas en Estados Unidos por arrendatarios, los millones de hectáreas cultivadas en la República Argentina por arrendatarios, las grandes extensiones cultivadas en todos los países agrícolas de la tierra, por hombres que las tienen en arriendo, son otros tantos páramos? Evidente-

mente, no. De manera que no es la frase de Young lo que puede servir para justificar económicamente la apropiación privada de la tierra. En realidad, el hombre que trabaja la tierra, si bien busca la propiedad, desea ante todo la estabilidad, y la estabilidad se consigue también, por otros medios que la subdivisión de la tierra y la entrega en propiedad a los agricultores. De todos modos tenemos un hecho: la inspiración de esta ley es individualista y tiende a dividir el suelo argentino entre los agricultores, convirtiéndolos en pequeños propietarios. Basta por ahora. Puesto siempre frente a la concepción de la ley, pasaré a otra cosa.

El señor miembro informante de la comisión decía algo que voy a comentar, cotejándolo con otra afirmación del señor diputado por la Capital doctor Repetto. Quiero explicar claramente que al citar a ambos no me guía un ánimo polémico sino oponer a una afirmación, una realidad que, a mi juicio, la contradice y respetando desde luego en uno y otro caso la sinceridad, la excelente información con que los señores diputado se han expedido.

El señor miembro informante decía, refiriéndose al mecanismo de la ley en lo que concierne a la distribución del suelo: «En lo posible su transferencia debe ser a precios reducidos, siguiendo el ejemplo de Canadá, en donde la tierra se vendió a treinta chelines el acre, contrastando con la colonización de Australia en que, siguiendo el plan Wackerfield, su enajenación se efectuó hasta por una libra para dicha medida». Aquí debe haber un error de cifras, pero no tiene mayor importancia. El señor diputado Repetto, por su parte, al especificar las condiciones en que se podía realizar esta colonización, hablaba de que debía ser hecha a base de una tasación moderada. Ahora bien; en las circunstancias actuales, dado el valor de la tierra, ¿es posible colonizar entregando a los propietarios a esos precios bajos que explican el éxito de la colonización en Estados Unidos y otros países? Me parece que se ha elaborado este punto de la ley con un criterio un poco anacrónico. Los treinta chelines de la colonización canadiense, la libra de la colonización australiana o el dólar a que se vendió el acre en Estados Unidos, pueden ser reducidos a moneda nacional argentina al tipo de cambio del momento. Los treinta chelines, suponiendo a un acre la mitad de una hectárea, representarían, entonces, 60 pesos la hectárea; la libra a 15, serían 30 pesos, y el dólar americano significaría 9 pesos la hectárea al tipo de cambio actual. ¿Puede decirse que la tierra argentina apta, que reúne condiciones económi-

cas para la producción remunerativa —no esa tierra llamada submarginal— puede ser entregada a los futuros colonos a los precios que acabo de indicar? Creo que no, y esta creencia no responde a una especulación de mi espíritu sino a comprobaciones realizadas en la vida que todos vivimos en un país eminentemente agrícola como el nuestro y en donde todos los hombres tenemos un conocimiento más o menos exacto de la realidad.

Uno de esos corresponsales que todos poseemos, aunque no, tal vez, del tipo del que citó el otro día el señor diputado por la Capital, doctor Repetto, me escribía sobre este particular, no ahora sino con fecha mayo 18 del corriente año, lo siguiente, que me parece oportuno repetir: «El sistema actual es exclusivamente, puede decirse, el del arriendo a propietarios particulares o bien, en territorios, al Estado». Casi el 70 % de los chacareros argentinos son arrendatarios. «Y esto es así, porque ningún chacarero se encuentra en situación de poder adquirir la chacra ni al contado ni a plazos». Afirmación corroborada el otro día por la autorizada opinión del señor diputado por la Capital, doctor Repetto. «Apenas sacan para comer y mal pueden intentar hacerse dueños del campo. Esto se pudo hacer en otros tiempos, los iniciales de la expansión agrícola, cuando con dos o tres cosechas buenas se podía ahorrar para el campo, aun no valorizado, al grado de lo que después se vió que rendían el trigo y maíz. Hacia 1900 se podía arrendar tierra cerca de Rosario, a 8 ó 10 pesos y comprarla a 80, y el maíz valía 5 ó 6 pesos.

En 1910, el maíz seguía valiendo lo mismo, pero el arriendo había llegado a 40 y el precio de la tierra a 400. Ya no era posible comprarla. Y en eso se siguió —salvo el excepcional período de la guerra, de trigo a 18 pesos— y se seguirá inevitablemente, porque es de necesidad científica. Ya Henry George lo observó en su tiempo, y dijo que al comenzarse la población y explotación, donde la tierra que no rendía vale poco y que de repente resulta rindiendo, el trabajador puede adquirirla con la ganancia del improvisado e imprevisto rendimiento. Pero de seguida la demanda de tierras, en arriendo y compra, las hace subir, —de acuerdo a la ley ricardiana— hasta la mayor renta y correlativo precio venal, que es posible pagar por ellas sin morir de hambre. Y éste es el tope normal, fatal y real. George era un hombre de comparaciones gráficas y lo expresó gráficamente, diciendo en un pasaje: «que cuando un tren comienza su marcha, aun es posible subirse

a él, pero cuando tomó velocidad no hay modo de alcanzarlo y treparse».

Yo temo, señor presidente, que la concepción a que obedece esta ley, es obligar al Estado a hacer trepar a sus futuros compradores a un tren que ya está en marcha y a gran velocidad.

Pero hay otro aspecto de este problema de la partición y entrega de la tierra a los arrendatarios.

Insisto en este concepto, porque creo que podré demostrar más adelante, que éste es un plan de colonización interna que no aumentará la población, como parece esperarlo el señor miembro informante del despacho.

Ahora sí, me voy a referir a otra afirmación del señor diputado por la Capital doctor Repetto, y quiero aclarar bien el concepto de esta referencia, porque algunas veces, en el pasado, hemos tenido nuestros rozamientos con el señor diputado por la Capital, pero ello no ha impedido que yo le tenga una particular consideración por su dedicación a los problemas argentinos, por su especial preocupación por el problema agrario, por su probidad mental y valentía para rectificar propios errores de concepto, cuando los ha considerado equivocados.

El señor diputado Repetto sostenía que «de esta cuestión agraria no se habla en muchas partes de la tierra, por ejemplo, en Francia y en países americanos, como Estados Unidos y Canadá». Considero que el señor diputado Repetto, al decir que no se habla de esta cuestión agraria, se habrá referido al aspecto de la partición y distribución del suelo.

Sr. Repetto. — Si me permite el señor diputado...

He querido decir que allí no existe ese problema; que no hay una cuestión agraria. En Francia hay tal vez una división exagerada de la tierra. Las explotaciones agrícolas son tal vez demasiado pequeñas.

De manera que lo que he querido decir es que allí la cuestión no existe. Existe en Andalucía, en la Argentina, en la mayor parte de la América latina, donde hay latifundios.

Sr. Guillot. — No percibo bien todavía el alcance de la interpretación del señor diputado. Su opinión sería que no existe cuestión agraria en lo que se refiere a la partición y distribución de la tierra. Sin embargo, creo poder afirmar que la cuestión agraria existe especialmente en los Estados Unidos, mucho más intensa que en nuestro país, en razón de la mayor extensión de las tierras cultivadas y de la mayor cantidad de capital invertido en ellas, del mayor número de población afectada a la

economía agraria y del mayor valor de los productos puestos en circulación. Existe una cuestión agraria tan candente, tan apremiante, que, en realidad, ha sido primordial en los Estados Unidos desde el año 1921 hasta 1933. Y me detengo en esta fecha porque ahí asume otro aspecto que más adelante examinaré.

Es bien sabido, señor presidente, todo el movimiento que ha determinado en los Estados Unidos la crisis agrícola originada con la caída de precios, la vasta agitación conocida con el nombre de movimiento Mac Naury-Haugen, que dió lugar a dos leyes sucesivamente vetadas, que tendían a resolver el problema de los precios mediante el *dumping* de exportación, suponiendo que el mercado internacional era capaz de absorber sin reacciones el exceso de producción que los Estados Unidos exportarían para poder establecer una regulación del precio interno.

Sr. Repetto. — ¿Me permite, señor diputado?

Para que precisemos el significado de los términos, a fin de que no prosiga esta confusión, que no tiene en el fondo ninguna razón de ser, diré dos palabras.

Los problemas que señala el señor diputado en los Estados Unidos son problemas de orden agrícola. El problema actual que ha señalado el señor diputado, la baja catastrófica del precio del trigo entre nosotros, no es un problema agrario, es un problema agrícola. Lo agrario se refiere a la división y distribución de la tierra. En ese sentido ha de comprender el señor diputado que cuando yo he dicho que no hay en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Canadá un problema agrario, quise decir que no hay el problema de la tierra, que no hay el problema del latifundio.

Sr. Guillot. — Me anticipé a decirlo y me complazco en recalcar que entendía que cuando el señor diputado hablaba de que no existía problema agrario —y lo corroboran sus palabras—, se refería a que no existía problema de partición y distribución de la tierra.

Ahora el distingo entre cuestión agraria y cuestión agrícola, acaso sea un poco sutil.

Sr. Repetto. — Es muy claro.

Sr. Guillot. — Todo problema agrícola está involucrado dentro de un problema agrario, como que se refiere a la distribución y explotación del suelo y a la colocación de sus productos.

De todos modos, quería decir que me había llamado la atención esta afirmación del señor diputado Repetto, y me complace haber provocado una aclaración.

Más adelante —y esto hace considerablemente a la cuestión, es decir, al procedimiento excogitado por la comisión para resolver el problema agrario argentino— el señor diputado Repetto hace otra afirmación que, por la misma autoridad de su fuente, debía llamar forzosamente la atención del diputado que habla.

El señor diputado por la Capital en su interesante exposición, nutrida, documentada. Llena de esas reflexiones jugosas con que él acompaña su consideración de los problemas nacionales, señalaba como un hecho desconcertante la comprobación estadística de la disminución gradual de los pequeños propietarios en los Estados Unidos y el acrecentamiento correlativo de los arrendatarios; y el señor diputado ensayaba una explicación provisional. Insisto en considerar en que el señor diputado no hizo hincapié en esta solución, sino que le dió, creo, carácter de provisional, susceptible de ser corregida más adelante. Desde que en los Estados Unidos el proceso del arrendatario sigue una marcha ascendente. Nosotros lo podríamos explicar pensando en que la tierra y el trabajo agrícola allá es bastante productivo como para permitir al dueño de una chacra arrendarle a su vez, a ir a vivir en la ciudad vecinas.

En realidad, la explicación existe. Es otra.

Sr. Repetto. — La explicación que he dado no es mía. Esa es una de las explicaciones que se ha dado de ese fenómeno.

Sr. Guillot. — Sí, señor diputado, y estoy seguro de que el señor diputado Repetto no hace mayor hincapié en esa afirmación. La explicación es otra; la explicación la da abundantemente el señor Henry Wallace, actual ministro de Agricultura de los Estados Unidos, en un libro que el señor diputado Repetto debe tener en su biblioteca y que se titula en la versión española *Las nuevas fronteras*. Voy a leer algunos párrafos, acaso un poco extensos, pero que tienen relación directa con el asunto en debate porque tienden a demostrar que la solución de la cuestión agraria por la entrega en propiedad, a los actuales arrendatarios, de una cierta cantidad de suelo rural no es la solución total, ni mucho menos, de la cuestión agraria.

Dice Henry Wallace: «Antes de la guerra nuestros agricultores recibían como el 15 por ciento de las entradas nacionales. En 1932 recibían como el 7 por ciento. Parte de esta merma en la participación que va a la agricultura, se debe al aumento de la población urbana, pero aun tomando una base *per capita*, los agricultores

pierden. Antes de la guerra la población agrícola, 30 por ciento del total, recibía el 15 por ciento del total de las entradas nacionales; en el fondo de la desinflación en 1933, la población agrícola, hoy 25 por ciento del total, recibió sólo el 7 por ciento de las entradas nacionales. El ingreso por cada persona ocupada fructuosamente en actividades no agrícolas antes de la guerra fué como de 700 dólares y el ingreso por persona fructuosamente ocupada en el campo fué como de 475 dólares, o alrededor de los dos tercios de lo que otros ganaban.

«Durante el período de la inflación de la guerra, los agricultores recibían una mayor participación en las entradas nacionales, y las ganancias individuales en industria y agricultura se acercaban más al equilibrio; pero esa ganancia fué más que borrada en el primer período de la desinflación de la posguerra, en 1920 - 22. En los prósperos años de 1925-29, con poca cesantía en el país, los no agricultores estaban ganando como 1.500 dólares por año; el término medio de los agricultores, no mucho más de la mitad de esa cantidad. En 1932, los 25 millones de personas que tenían trabajo estaban ganando un poco menos de 1.300 dólares por año; los 13 millones que no tenían ocupación estaban viviendo de la caridad o de los ahorros. Mientras tanto los agricultores ganaban como 400 dólares cada uno, gran parte de lo cual era en la forma de alimentos que ellos mismos producían, y carecían de dinero para pagar los gastos, de administrar un negocio agrícola de 150 acres y mantener a una familia de cinco personas proveyendo a sus necesidades».

Más adelante agrega: «Los acontecimientos pronto justificaron sus temores. El final de la gran guerra había dejado al agricultor americano varado y en seco. Junto con todos los demás, pero desde diez años antes que la mayor parte de ellos, estaba subido en los zancos de los altos precios, altos jornales, alto costo de la tierra y altas deudas. Mientras Europa sembraba la tierra con tremendos explosivos, América estaba sembrando más trigo para alimentar a los hombres que hacían y disparaban los explosivos y efectuaban la matanza del momento. Se aumentaron los sembrados, nuevas tierras fueron puestas bajo el arado, nuevas maquinarias fueron enviadas afanosamente al uso para reemplazar a trabajadores de altos jornales».

Y por fin expresa: «Para la mitad de la población de Estados Unidos, la continua agitación por leyes protectoras de la agricultura, de 1924 a 1929, parecía completamente inne-

cesaria. Cuán necio parecía hablar de protección a la agricultura cuando Radio Common estaba por arriba de 500 dólares cuando cada garaje privado tenía, por lo menos, dos automóviles, cuando la Nación podía jactarse de tener más millas de caminos sólidos y de líneas telefónicas que la suma de los que tuvieran cualesquiera dos o tres países combinados. Era una falsa prosperidad. Ocultaba el hecho de que centenares de miles de agricultores estaban perdiendo sus propiedades. Entre 1920 y 1933, una propiedad de cada cuatro era rematada por deudas o contribuciones.

No me parece necesario proseguir para demostrar que, en realidad, ese decrecimiento de los pequeños propietarios y ese aumento de los

arrendatarios no obedece a un fenómeno de prosperidad.

—Suena la campanilla que anuncia la expiración del término acordado al orador.

Sr. Guillot. — Creo que, reglamentariamente, puedo pedir media hora más.

Sr. Presidente (Kaiser). — Exactamente, señor diputado. Se someterá el pedido a votación.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente (Kaiser). — No habiendo número en la casa, queda levantada la sesión.

—Era la hora 20 y 5 minutos.